

Arturo Sosa A.

Haití: Soñar puede costar la vida

El 29 de septiembre de 1991 corrió la noticia de un nuevo golpe de Estado en Haití. Esta vez la consternación fue mayor porque el Presidente Jean-Bertrand Aristide obtuvo cerca del setenta por ciento de los votos en las elecciones más vigiladas y limpias de la historia haitiana. El golpe fue sin contemplaciones. El Presidente Aristide salvó su vida saliendo del país, bajo la protección del embajador de Francia, en el avión del Presidente de Venezuela. Las Fuerzas Armadas haitianas tomaron las zonas populares de las principales ciudades del país para evitar una reacción de la gente en defensa de quien ellos eligieron. La represión "disuasiva" tomó la iniciativa de disparar por las noches en los barrios donde los militares suponían podría iniciarse la resistencia al golpe.

La comunidad internacional, en medio del asombro, reconoce a Jean-Bertrand Aristide como el Presidente de Haití y decide acciones para conseguir su retorno. Los golpistas se esfuerzan también por consolidarse en el poder. El proceso aún no ha culminado. Aristide sigue sus gestiones en Europa y América para asegurar su retorno. Internamente no se ha normalizado el país y surgen diversas formas de resistencia. El gobierno surgido del golpe no logra su completa consolidación. Intentamos una reflexión sobre los factores que intervienen en esta situación como complemento al artículo del P. Emile Beldor, fruto de su vivencia durante los siete meses del gobierno de Aristide.

HAITI ES HAITI

Suena a perogrullada, pero aquí se trata de una premisa de la cual queremos partir. Para la mayoría de los venezolanos, de los latinoamericanos y más todavía de los norteamericanos y europeos, es muy difícil hacerse una idea de Haití desde Haití. No sólo es un problema de escasa información. Todos sabemos que es el país más pobre del continente, que su economía es de subsistencia, que la mayor parte de su población es negra, que allí se efectuó una gran rebelión de esclavos... Pero, no nos percatamos fácilmente de la distancia cultural existente

entre el pueblo haitiano y nosotros. En términos políticos ignoramos las peculiaridades de las relaciones sociales, las tradiciones en el ejercicio del poder que condicionan en última instancia la conducta política de la mayoría popular haitiana.

Lo expresaba Carlos A. Romero en su artículo de *El Diario de Caracas* del 20 de octubre: "Simples fórmulas mágicas, viejos resabios hispano-racistas y un peligroso voluntarismo han limitado la posibilidad de entender la vida caribeña", por lo cual: "Debe hacerse un esfuerzo muy grande para superar las visiones esquemáticas e idealistas que nublan la posibilidad de comprender sociedades con un débil impulso a la modernización." Intentar entender y tomar una posición frente a la actual situación de Haití requiere como primer paso reconocer las peculiaridades de esa sociedad y evitar la fácil trasposición de la propia cultura política a una situación en la que los gestos, símbolos y lenguaje aunque parezcan los mismos, no lo son.

Una segunda premisa para evitar mayores distorsiones sobre el proceso haitiano es la de diferenciar clara y tajantemente la posición que se tiene frente a Carlos Andrés Pérez, su gobierno y su política exterior, del juicio que se haga sobre la gestión de Aristide. El análisis político exige la capacidad de ver los hechos como son antes de emitir juicios u opiniones. Posturas conscientes o inconscientes como "si lo apoya Pérez, es buscando notoriedad hacia afuera" no ayudan a percibir las características propias de la situación sobre la que se quiere opinar. Al leer la prensa de opinión venezolana (reconociendo que hay excepciones) en estos días uno saca la impresión de que lo que importa es opinar sobre la actuación de C.A. Pérez más que sobre la situación haitiana, sobre la que parece manejarse una información imprecisa. Desde el punto de vista ético es intolerable el "aprovecharse" de la situación haitiana, o de los supuestos "errores" del gobierno venezolano para hacer oposición política o ganar terreno en determinados sectores de la opinión nacional o internacional.

En la línea de aclarar las premisas de

este análisis es importante poner de manifiesto la perspectiva desde la que afrontamos la situación de Haití. Desde las páginas de esta revista hemos intentado percibir y apoyar las corrientes democráticas latinoamericanas. Somos conscientes de que no puede darse la democracia si no se constituye el pueblo organizado como sujeto de la vida social, económica y política de las naciones del continente. En ese sentido juzgamos como perjudiciales para la salud de los pueblos latinoamericanos aquellos regímenes políticos que impiden, obstaculizan o retrasan el lento proceso de la constitución de ese sujeto democrático y alentamos las situaciones, oportunidades y fuerzas que favorecen ese proceso.

DEMOCRACIA Y TRANSFORMACION RADICAL

Si de algo no se puede dudar en relación al proceso haitiano es que el gobierno de Jean-Bertrand Aristide tiene un origen netamente democrático. Llega a la Presidencia de la República como genuino representante de la mayoría de la sociedad haitiana. Más aún, es llevado allí por un movimiento social compuesto por los sectores populares de esa sociedad. Este dato es conveniente tenerlo presente, porque las acciones contra la persona de Aristide antes y después de las elecciones de diciembre de 1990, cobran significados muy diferentes. Si antes, como candidato presidencial o como activista social, eran contra una propuesta o una forma de actuar no formalmente aceptada por la mayoría, después de las elecciones se convierten en una acción contra la voluntad claramente expresada de la mayor parte de los ciudadanos haitianos. En ese sentido, los siete atentados a los que sobrevivió *Tidade* antes de ser elegido Presidente tiene un significado distinto al intento de derrocamiento y amenaza de muerte del 29 de septiembre. Se atentó contra la representación mayoritaria del pueblo. Se intentó matar la voluntad de la sociedad libremente expresada, es decir, contra el fundamento mismo de la democracia como la entiende la comunidad internacional en este momento de su historia.

El proyecto político de Jean-Bertrand Aristide es igualmente democrático. Más aún, porque cree en el pueblo y en la posibilidad de que éste sea sujeto de la sociedad haitiana, porque no se considera un elemento extraño, distinto, superior a ese pueblo, porque echa su suerte en la lucha del mismo pueblo... llega a formular un proyecto político y convertirse en candidato a la Presidencia de la República.

El eje fundamental de ese proyecto es el fortalecimiento del pueblo para que

pueda ser sujeto en el más complejo sentido de esta expresión. De allí la importancia que dio desde su programa y desde el gobierno, al plan de alfabetización que constituye el eje de cualquier transformación democratizadora que quiera hacerse en Haití. El ochenta y cinco por ciento (85%) de una población de 6.5 millones de habitantes, no sabe leer ni escribir. El cimiento de un pueblo alfabetizado permite la construcción de un pueblo organizado. Las organizaciones populares, sobre las cuales se funda un proceso democratizador, son las que van a constituir el tejido de una sociedad cuyo desarrollo económico, cultural y político sea realmente distinto.

La realización de un proyecto de esta naturaleza supone una transformación radical de la actual realidad haitiana y un giro en el rumbo de su historia de proporciones formidables. Se trata de modificar hasta las raíces más profundas de las relaciones que han constituido esa sociedad. La presencia de Aristide en la Presidencia de la República, con el enorme aval popular que lo llevó allí, significa acercar la posibilidad de esa transformación imprimiéndole un paso acelerado. Sin embargo, es apenas el inicio de un proceso que tiene resistencias concretas y cuenta con la fuerza de la inercia histórica.

Bien conocido por todos los observadores internos y externos es el obstáculo representado por las Fuerzas Armadas. Por eso, desde el inicio de su gobierno, Aristide propuso el "matrimonio" entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. Si tomamos esa imagen como referencia, podríamos decir que la aceptación de su elección y de su toma de posesión es el inicio del "noviazgo" que aspira a terminar en matrimonio. Ese noviazgo continuó durante los primeros meses del gobierno. Dos obstáculos se oponían a que ese noviazgo se convirtiera en matrimonio. La renuncia al espíritu de casta de las Fuerzas Armadas, para ponerse a tono con el proceso democrático que implica necesariamente su subordinación al poder civil, con la renuncia a los privilegios que toda casta adquiere y emparejando su suerte con la del resto de la sociedad haitiana. Y la erradicación de las prácticas corruptas en su seno que van desde la participación en el contrabando, el desvío de fondos públicos...etc, hasta la participación en el negocio del narcotráfico. En este momento hay una ruptura de ese proceso. El Presidente Aristide sostiene que el matrimonio puede darse pues la mayor parte de los militares están deseosos de hacerlo.

Igualmente importante es la relación con el Parlamento. En un régimen democrático el Congreso es la representación

de la sociedad. En Haití todavía eso no es así. Allí están mejor representados los sectores tradicionalmente poderosos que las fuerzas emergentes. Una cosa representa la Constitución aprobada en referéndum popular en 1987 y la Presidencia después de las elecciones de 1990 y otra el Parlamento. Esta tensión ha significado otras piedras en el camino de la democratización. La relación Aristide-Parlamento no ha sido fácil en estos siete meses. El primero, en su empeño por acelerar la realización de su proyecto ha presionado nombramientos, participación popular... a contrapelo de una buena porción de los congresantes que han reaccionado oponiéndose a asuntos claves como el nombramiento del Primer Ministro Preval, propuesto por Aristide.

Estos dos casos son representativos de la dificultad de adelantar la transformación radical que supone el proceso de democratización deseado por la mayoría del pueblo haitiano y las fuerzas democráticas del continente. Dificultades lo suficientemente grandes como para amenazar con frustrar el proceso.

LAS 'RAZONES' DE UN GOLPE QUE BUSCA CONSOLIDARSE

La cabeza visible del movimiento contra el Presidente Aristide, el General Raoul Cedras, Comandante de las Fuerzas Armadas ha intentado explicar las causas por las cuales procedieron a amenazar la vida de Aristide y expulsarlo del país. Según el Diario de Caracas enumeró las siguientes: el nombramiento de jueces, embajadores y diplomáticos sin la aprobación del Senado, distribución de grados y reintegro de oficiales sin el consentimiento de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas, distribución masiva del dinero del tesoro público a organizaciones religiosas y populares; así como el despido de funcionarios públicos que no pertenecieran a su movimiento. Rechazo del Ejecutivo a asistir a interpellaciones obligatorias del Congreso y proceder a arrestos masivos sin el debido juicio. Otras fuentes insisten en que se violaron los Derechos Humanos.

Dos "razones" resumen todas las demás: "no supo liberarse de su liderazgo popular para convertirse en el Jefe del Estado que todos necesitaban y aspiraban" y se trata de "una rectificación del proceso democrático" puesto que Aristide ha violado la Constitución repetidas veces en estos meses. La más "jalada por los cabellos" de las "razones" esgrimidas por los militares y el gobierno sustituto es que Aristide ya no es Presidente Constitucional porque firmó un papel de renuncia al cargo, bajo amenaza de muerte. La invalidez de este argumento es tan obvia que

avergüenza hasta escribirlo.

Evidentemente el Presidente Aristide interpreta los hechos de otra manera y niega acusaciones tales como que incitaba a que la gente tomara justicia por su propia mano y que usara el antiguo método de "castigar" a los esclavos, prendiéndoles fuego alrededor del cuello. La causa la atribuye a la resistencia a abandonar sus privilegios y asumir las características propias de unas relaciones democráticas de los grupos que han disfrutado del poder y de los beneficios sociales a costa del resto de la población. Insiste, además, en la relación directa con esta acción que tienen los sectores vinculados al narcotráfico.

Quizás lo más importante en este momento no es discutir cada una de las razones de parte y parte. Es probable que el Presidente Aristide haya cometido errores en su gestión. Que su responsabilidad hacia el pueblo que lo eligió lo llevara a sentir la necesidad de cumplir con la palabra empeñada sin dilaciones y no estuviera dispuesto a detenerse por "formalidades" usadas por sus enemigos para frenar el proceso. Sea cual sea la "objetividad" de las acusaciones contra el gobierno democrático, el procedimiento utilizado para corregir su rumbo es simplemente inaceptable. No se puede "rectificar" una desviación democrática suprimiendo la ruta democrática, es decir por procedimientos anti-democráticos e ilegales. En este sentido ningún razonamiento puede justificar el levantamiento armado ni la expulsión por la fuerza, bajo amenaza de muerte, del Presidente legalmente elegido. Menos aún cuando la Constitución prevé mecanismos de control sobre la actuación del Ejecutivo y mecanismos para actuar contra el Presidente en caso de que éste atente contra la Ley o los Derechos Humanos.

Dos factores no han sido mencionados en este análisis: el boicot "internacional" disimulado al gobierno democrático y el papel de los Estados Unidos durante los siete meses y en el golpe. La contribución de organismos internacionales y otros países al proceso electoral fue crucial para que se pudiera realizar limpia y honestamente. Pero, todos sabemos que las elecciones son apenas un paso en la democratización. Luego hay que crear las condiciones económicas y sociales para hacerla realidad. En la euforia electoral se le ofrecieron a Haití y al Gobierno presidido por Aristide toda clase de ayudas para proyectos económicos, construcción de infraestructura, transferencia de tecnología, educación y capacitación... Siete meses y las ayudas, asistencias, créditos, misiones técnicas no llegaron... ¿Desidia, olvido, inconciencia, engaños, boicot?

Los Estados Unidos apoyaron la vuelta

a la democracia. En ese momento había aparecido Aristide como candidato presidencial. Tenían el candidato hecho a su medida, Marc Bazin, con probabilidades de ganar e imponer en Haití el mismo "paquete" económico que en el resto de Latinoamérica, "en nombre de la democracia". El triunfo de Aristide desbarató esos planes. Comienza el doble lenguaje. Las declaraciones políticas y diplomáticas mantienen el reconocimiento de Aristide, aun después del golpe. Pero la ayuda no llegó... la embajada norteamericana fue receptora y trasmisora de los "descontentos" respecto al gobierno en ejercicio... y el propio embajador norteamericano en Puerto Príncipe participó en la planificación de la "eliminación" de Aristide, para enmendarle la plana a los electores que lo habían elegido.... La gran prensa norteamericana pasó repentinamente de condenar el golpe a responsabilizar a Jean-Bertrand Aristide de la situación que lo provocó y de la represión que lo ha seguido, en función de crear un ambiente de opinión contrario a su regreso.

LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD

Después de tres semanas del golpe, Aristide sigue siendo reconocido como el legítimo Presidente de Haití. Pero está en el exilio. No lo han dejado regresar las fuerzas que insurgieron contra él y las medidas de apoyo de la comunidad internacional no han logrado obligar su regreso.

Es necesario reconocer como novedad la rápida y unánime reacción de la Organización de Estados Americanos. Al día siguiente se reunieron los Cancilleres de los países miembros y unánimemente, en coherencia con la resolución tomada en su reunión de Chile de defender la democracia en el continente, eligieron una misión de entre ellos que se trasladara a Haití, buscando la restitución de Aristide. Al no lograr ningún acuerdo se aprobó el bloqueo económico de todos los países miembros y la organización de una "misión civil" de unos 500 miembros que permanezcan en la Isla hasta lograr la estabilidad del gobierno elegido por su pueblo. En esta semana el Secretario General debe llevar a cabo la formación de esta misión civil y recibir el informe de cada uno de los países miembros sobre el detalle de las medidas que ha tomado cada uno para lograr el bloqueo acordado.

La Asamblea General de las Naciones Unidas recibió al Presidente Aristide y luego aprobó una Resolución en la que sostiene que ningún gobierno emanado del golpe militar sería aceptable para los países miembros y exhorta a Haití a la adopción de medidas para retornar al

orden democrático. Por su parte, la Unión Interparlamentaria Mundial condenó el golpe sin ambages

Aristide ha hecho una intensa movilización diplomática buscando que sea el apoyo internacional el que logre que los golpistas desistan de su actitud y pueda regresar a ejercer su cargo. Ha sido recibido tanto por la reunión de Cancilleres de la OEA, como por la Asamblea General de la ONU. Varios Presidentes y Primeros Ministros latinoamericanos han puesto recursos a su disposición. El Presidente Bush lo recibió en la Casa Blanca como el único Presidente de Haití. Insiste en que es necesario restituir el gobierno democrático sin derramar sangre de su pueblo.

Los golpistas están haciendo, igualmente, un enorme esfuerzo por legitimar su actuación, lograr el reconocimiento político y evitar el bloqueo. Los militares, con Cedras a la cabeza, buscan demostrar que no se trata de un movimiento militar para quedarse con el gobierno. Sin embargo, logran el nombramiento de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Joseph Nerette, como Presidente Interino tomando militarmente el Parlamento. Al acto de su juramentación no asistieron ni el Cuerpo Diplomático ni los representantes de la Jerarquía Eclesiástica. Una de las primeras medidas del Presidente Interino es ratificar a Cedras como Comandante General de las Fuerzas Armadas por tres años. Rápidamente se procede a una purga dentro de la fuerza militar para expulsar (y hasta exilar) a los oficiales que habían sido reintegrados por órdenes de Aristide y poner en los puestos de comando a los fieles al régimen golpista. Mientras tanto, se mantiene la tropa en las calles de las grandes ciudades para evitar una fuerte reacción popular, y se persigue sistemáticamente a los miembros del gobierno democrático y a los dirigentes del movimiento que lo apoyó electoralmente.

Como parte de ese mismo esfuerzo de legitimación nombran como Primer Ministro a Jean-Jacques Honorat, fundador y director del Centro Haitiano de las Libertades Públicas. Conocido opositor de J.B. Aristide y defensor de los derechos humanos desde hace muchos años. Indudablemente su designación pretende ofrecer la imagen de un gobierno civil respetuoso de los derechos humanos, aunque la realidad sea otra. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha denunciado casos de detenciones arbitrarias, torturas, matanzas colectivas, asesinatos de las fuerzas golpistas..., y manifestado su preocupación por la alarmante violación de los derechos humanos sucedida durante y después del golpe.

La resistencia interna al golpe no ha cesado. La vida urbana no ha recobrado su ritmo normal. Los Obispos Católicos

publicaron un documento en el que, en un tono principista, invitan a regresar al cauce democrático. La Conferencia de Religiosos de Haití, en un documento leído en todos los templos y comunidades de base el domingo 20 de octubre exhorta a la resistencia popular y a encontrar la forma de devolver a Aristide y su equipo al gobierno. El sector privado de la economía, a través de sus organizaciones, también ha reclamado el retorno a la Presidencia de Aristide. Este exclamó en Caracas: "los últimos acontecimientos ocurridos en Haití, demuestran que nuestro pueblo prefiere morir por defender los principios de la democracia que vivir en dictadura." El miércoles 23 se produjo una huelga general de 24 horas.

El grupo golpista inició en los últimos días un nuevo intento de legitimarse al proponer negociar directamente con la OEA para buscar una salida y sobre todo para evitar que se cierre el bloqueo. También ha tocado las puertas del gobierno norteamericano. Insisten en que tanto el regreso de Aristide como un bloqueo efectivo producirían una guerra civil dentro de Haití.

La lucha no ha terminado. La presión internacional efectiva y la resistencia del pueblo haitiano son la esperanza de restitución de la democracia, que llevaría a demostrar que, también dentro de las Fuerzas Armadas y otros sectores tradicionalmente poderosos de Haití hay voluntad de continuar el camino. Del otro lado habla la contundencia de las armas y del hecho cumplido.

LA POSICION DEL GOBIERNO VENEZOLANO

Puede examinarse desde dos perspectivas distintas. Evaluar su impacto en la democracia haitiana o para el Estado Venezolano y su Política Exterior. En relación a la primera perspectiva podemos afirmar que la posición de Venezuela ha contribuido al proceso de democratización del régimen político de Haití. No se ha limitado a un apoyo verbal, sino a una contribución directa en la organización de los partidos políticos y en la realización del proceso de votaciones de diciembre de 1990. Igualmente, la gestión diplomática ha contribuido a abrir las puertas a la aceptación del proceso por parte de otros países del continente y del resto del mundo. También ha habido ayuda directa con recursos humanos y materiales a programas de asistencia social de emergencia para mejorar la alimentación y la salud del pueblo haitiano. Lo que se ha hecho ha sido positivo. La duda es si hemos hecho lo suficiente, no sólo si el Gobierno y el Estado lo han hecho, sino si la sociedad venezolana asume alguna responsabi-

dad en la creación de las condiciones para que ese país supere las condiciones infrahumanas en las que vive la mayoría pobre de su población.

El Gobierno del Presidente Pérez actuó, además, con rapidez y eficacia en el momento mismo del golpe para defender la vida del Presidente Aristide, sus colaboradores, contribuyendo así a que el costo en vidas humanas de la acción disminuyera. También su contribución a la puesta en marcha del rechazo internacional y el prestarle el apoyo logístico al Presidente Aristide para su gestión diplomática en busca de su retorno al ejercicio del cargo ha sido importante para Haití.

Desde la perspectiva interna, una primera pregunta sería si C. A. Pérez ha actuado "por su cuenta", personalista, buscando notoriedad o puede entenderse dentro de otros parámetros. Diversas voces dentro del país no han desperdiciado la ocasión para insistir en que lo que busca Pérez es anotarse un tanto en lo exterior ante los continuos fracasos de su gobierno. Sin embargo, en este caso concreto hay que reconocer que la posición del Gobierno venezolano, al apoyar la restitución del gobierno legítimamente elegido en comicios libres, se ajusta a la decisión de la Asamblea de la OEA de Chile y el Compromiso de Defensa de la Democracia, adoptado por sus miembros. La polémica puede plantearse en términos de los medios propuestos para esa defensa de la democracia. Venezuela y Argentina sostuvieron la conveniencia de una intervención militar multinacional para garantizar el retorno a la democracia y evitar nuevas confrontaciones internas. Los demás países, incluyendo el propio Haití, no estuvieron de acuerdo, ni la Carta de la OEA prevé esta posibilidad. Se

optó por la vía de las presiones diplomáticas y económicas. El argumento de que una acción de esta naturaleza crearía un precedente que facilitaría una intervención militar unilateral norteamericana en Cuba o algún otro país latinoamericano está fuera de contexto porque no se ajustaría a acuerdo interamericano alguno, además de que los precedentes los han creado ellos mismos que han intervenido a veces, y no precisamente en defensa de la democracia. En todo caso, queda clara una nueva actitud de la OEA y de sus países miembros en cuanto al esfuerzo de iniciar y consolidar un camino democrático para los pueblos del continente americano. En este sentido hay un largo camino que recorrer para encontrar medios eficaces de impulsar la democratización y convertir este foro internacional en sostén de la justicia y la paz de los pueblos.

La postura de la OEA y del Gobierno de Venezuela ponen también sobre el tapete la discusión de la interpretación tradicional del principio de la no-intervención y de la soberanía de los Estados —en la práctica de los gobiernos—. ¿Estamos asistiendo a un nuevo episodio de traslado de los derechos de los Estados Nacionales a una instancia supra-nacional aún no muy definida? En el ámbito de lo económico el mundo vive una tendencia acelerada hacia el rompimiento de las fronteras nacionales. En lo político, el influjo de las superpotencias y las diversas formas de imperialismo han prescindido, en el pasado, de las naciones. Hoy la creciente interdependencia exige cambios en el papel de los Estados nacionales. Hace falta que estos cambios se den conscientemente, discutiéndolos abiertamente y por la vía del acuerdo, no de la imposición o la impro-

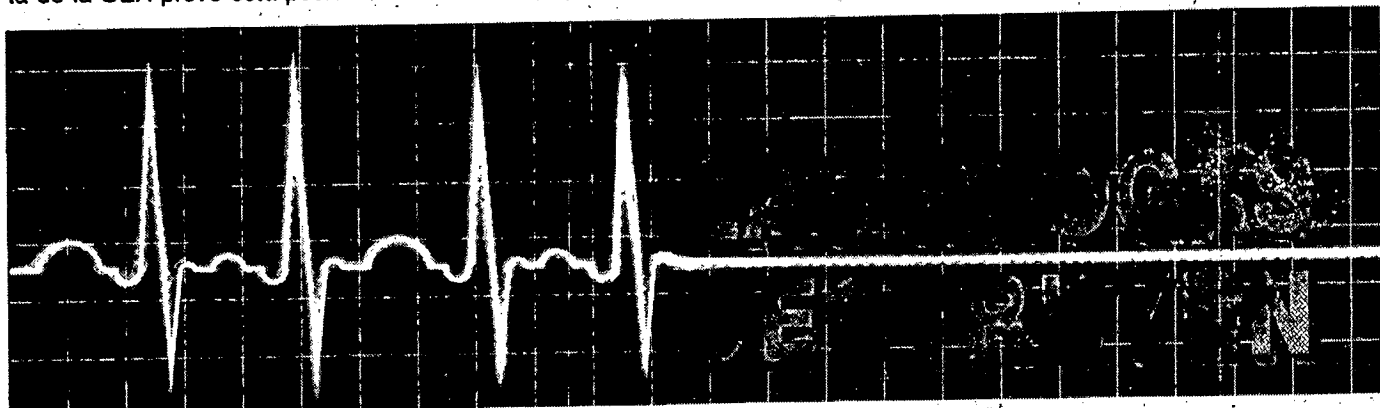
visación.

NO HAY SALIDA SIN DEMOCRACIA

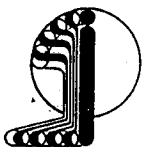
No ha faltado quien recuerde que no hay ningún caso en América Latina en el que un Presidente depuesto por militares sea reinstalado en el poder. La salida "resignada" es la aceptación de la fatalidad y de la inevitabilidad de la reacción militar violenta contra cualquier mandatario que los disguste, especialmente en países pequeños, pobres y sin petróleo como Haití.

Frente a ese fatalismo se ha levantado la firme posición del Presidente Aristide de exigir su regreso sin concesión alguna a los golpistas. Los presuntos "errores" o excesos de su gobierno deben ser señalados, juzgados y corregidos por la vía democrática prevista en la Constitución y las leyes haitianas. Ellos no justifican ninguna acción armada, divorciada de la voluntad popular. Esta postura exige la restitución pura y simple de la situación antes del golpe.

De ella partieron los organismos internacionales, particularmente la OEA. Ahora se insiste en la negociación, propuesta insistentemente por el gobierno surgido del golpe. Algunos sectores políticos le echan en cara a Aristide su inflexibilidad, vista como imposibilidad para negociar. Resulta evidente que cualquier salida exige alguna negociación. Pero no cualquier negociación. La inflexibilidad no siempre es un vicio. La coherencia democrática es una virtud política y no se puede negociar la con la voluntad del pueblo, ni siquiera en situación de debilidad. Cualquier salida, pues, debe tener como principio irrenunciable la vida y la voluntad del pueblo haitiano.



Por la vida



FUNDACION JOSE FELIX RIBAS

Educar es Prevenir

Fundación JOSE FELIX RIBAS : Investigación, Prevención y Tratamiento del uso indebido de Las Drogas. Tifs.: 572.02.07 572.08.73 572.99.74

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION INTERNACIONAL DE LAS DROGAS. (P.N.U.F.I.D.)